

6.

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO – ORALIDAD

CIRCUITO DE BOGOTA

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUTIVO 2019-00048

DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ vs. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

Bogotá D.C, veintiocho (28) de Febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)

Ingresa el proceso ordinario promovido por la señora **DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ** en contra de la **PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION**, para el siguiente

I. ASUNTO:

Decidir acerca del proceso ejecutivo que correspondió por reparto y, fue radicado por el apoderado judicial de la señora **DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ**, con la finalidad de obtener el cumplimiento a la sentencia de Segunda Instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” con ponencia del Dr. **JOSE MARIA ARMENTA FUENTES**, el 17 de agosto de 2017, la que quedó ejecutoriada el 3 de octubre de 2017.

Al respecto, se

II. CONSIDERA:

Frente a la acción ejecutiva radicada, observa el Despacho que no se satisface el presupuesto de la debida liquidación del crédito. Para este efecto, el artículo 424 del CGP, denominado “EJECUCIÓN POR SUMAS DE DINERO”, enseña que el título ejecutivo no necesariamente debe contener una cantidad líquida de dinero, lo importante es que sea liquidable. En efecto, el aludido texto legal dispone que la obligación de “*pagar una cantidad líquida de dinero*” puede

ser “la expresada en una cifra numérica precisa o que sea liquidable por operación aritmética”.

Esto significa que el título no es simple sino complejo¹, porque el interesado en la ejecución tendrá que establecer el valor de la sentencia a través de una liquidación. Por manera que la aludida sentencia no es suficiente para iniciar el cobro ejecutivo, además de la citada providencia, se requiere el escrito de liquidación del crédito por ser la forma como se determina el valor de la obligación.

Sin embargo, la elaboración de la liquidación no puede quedar al arbitrio o liberalidad de la parte interesada en la ejecución, sino que debe sujetarse a los presupuestos establecidos en la ley. Esto significa que la liquidación integra el título cuando reúne los presupuestos legales. En efecto, los artículos 424, 430, numeral 1, y 446 del CGP permiten afirmar que la liquidación debe mostrar o desarrollar los parámetros o lineamientos de la sentencia, sustentarse de forma documental, y revelar las operaciones aritméticas que conducen al valor del capital adeudado y el monto de los intereses. Las anteriores condiciones que se revisarán conjuntamente con la liquidación aportada por el ejecutante.

1. De los parámetros o lineamientos de la sentencia. El artículo 424 *ejusdem* exige que el título objeto de la ejecución sea “liquidable”. La palabra entre comillas da a entender que la sentencia debe contener unos márgenes, indicadores o parámetros que guían el cálculo del valor de la condena. El liquidador tiene la carga de desarrollar cada uno de los puntos de la sentencia que permiten estimar el valor del título ejecutivo.

En este caso, la orden jurisdiccional se compone de los siguientes aspectos: el valor de la mesada indexada; los reajustes anuales de la primera mesada indexada; la deducción del valor de las mesadas pagadas; indexación de las diferencias mensualmente adeudadas; el capital y los intereses moratorios.

2. Sustentación de la liquidación. El artículo 430, numeral 1º, del CGP de forma expresa señala que la liquidación se presentará “*adjuntando los documentos que la sustenten*”. El texto se refiere a aquellos datos necesarios para liquidar el crédito que no se encuentran en el título ejecutivo. En concreto, la

¹ “el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos” (Corte Constitucional, Sentencia T-747-13).

7

documentación se predica de las cifras básicas para establecer el valor del capital adeudado.

Cabe decir, que la sustentabilidad de la tabla de liquidación no es caprichosa. Por un lado, permite constatar el origen y veracidad de las cifras que obran en la liquidación. Los documentos de soporte, como certificados, constancias y otros elementos de prueba, le confieren objetividad a la liquidación. Por otra parte, la sustentación evita la arbitrariedad de parte del ejecutante porque tendrá que decir de donde toma la información que le sirve de base para liquidar la deuda, y le garantiza al ejecutado el derecho de defensa porque puede conocer el origen de los datos base del cobro, mientras que al Juez le facilita la labor de verificar la legalidad de la solicitud de mandamiento de pago.

3. Las operaciones aritméticas. El comentado artículo 424 del CGP también dispone que la condena debe ser liquidada mediante “operación aritmética”. Ello implica, para el liquidador, revelar los ejercicios o fórmulas que utilizó para establecer al valor de la suma adeudada, a fin de que el Juzgado conozca el origen de las cifras deducidas y que aparecen en la tabla de liquidación.

En este caso, las operaciones aritméticas corresponden a las que permiten calcular el valor de la indexación, el reajuste anual, las diferencias, y la indexación de las diferencias, el capital adeudado y los intereses. El liquidador del derecho omitió exponer dichas operaciones aritméticas, lo cual impide librar el mandamiento de pago.

Así quedan expuestas las condiciones que debe reunir la liquidación del crédito, y aquellas que no cumplió el ejecutante. Las comentadas falencias de la solicitud de apertura de proceso ejecutivo como de la liquidación de la condena, no le permiten a esta instancia determinar que sea procedente el cobro del saldo alguno o intereses, menos aún, librar mandamiento de pago por la suma que se estime legal, pues el ejecutante no aportó los documentos que sirvan de soporte a las cifras base de la liquidación de la condena.

A lo anteriormente expuesto debe agregarse que al momento de expedirse la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo de la Contencioso

Administrativo), no se estableció, el procedimiento especial para los procesos ejecutivos, lo anterior en consideración a que en el título IX del citado código, sólo se reguló lo relativo a: (i) a los actos jurídicos constituyentes del título, (ii) a la prescripción de los títulos ejecutivos, numerales 1º y 2º del artículo 297 y (iii) a la ejecución en materia de contratos y condenas impuestas a entidades públicas (artículo 299), por lo que en este tipo de procesos se hace necesario dar aplicación al artículo 306 del estatuto administrativo, que prescribe la remisión a la norma procesal, teniendo presente que la actualmente vigente es la consagrada en el Código General del Proceso; **tal postura fue acogida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 24 de junio de 2013,** expediente N° 2012-029, con ponencia del Doctor LEONARDO TORRES CALDERÓN, donde se dijo:

*“(…) En consecuencia si bien el Acuerdo No. PSAA12-9454 de 23 de mayo de 2012 del Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Veintisiete (27) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., se encuentra actualmente conocimiento de los procesos regulados por el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), y que el Juzgado Veinticinco (25) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., tenga a su cargo “las funciones y competencias derivadas de la implementación del nuevo sistema procesal en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa consagrado en la Ley 1437 de 2011”, **lo cierto es que el trámite del proceso ejecutivo no se encuentra regulado en los mencionados Códigos sino en el Código de Procedimiento Civil** (…)” (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Teniendo en cuenta que en materia de procesos ejecutivos la norma aplicable es el estatuto procesal civil, en estos momentos la Ley 1564 de 2012 – CGP, el Despacho encuentra que el artículo 442 Ibídem contempla:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen

8

honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”(Negrilla del Despacho).

El nuevo estatuto procesal, también trae consigo lo correspondiente al mandamiento ejecutivo de pago, que a voces del artículo 430 consagró:

*“ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal...”
(Negrita y subrayas propias).*

Sobre la exigencia ordenada en el artículo 430 Ibídem, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo, **HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SECCION TERCERA – SUBSECCION B,** C.P. Dr. Enrique Gil Botero, en sentencia del 24 de abril de 2014. Radicado 07001-23-31-000-2000-00118-01(26621), al revisar el valor probatorio de las copias y, las exigencias para el título ejecutivo consideró:

*“...i) los documentos públicos o privados, emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, se presumen auténticos, ii) es posible que las partes los tachén de falsos o los desconozcan, lo que originará que se surta el respectivo trámite de la tacha, iii) los documentos se pueden aportar al proceso en original o en copia, iv) las copias, por regla general, tendrán el mismo valor probatorio que el documento original, salvo disposición especial en contrario, v) cuando se aporta un documento en copia, corresponde a la parte que lo allega indicar –si lo conoce– el lugar donde reposa el original para efectos de realizar el respectivo cotejo, de ser necesario, y vi) las partes pueden solicitar el cotejo de los documentos aportados en copias.
(...)*

Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios –como los procesos ejecutivos– en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.). Por consiguiente, el criterio jurisprudencial que se prohíba en esta providencia, está relacionado específicamente con los procesos ordinarios contencioso administrativos (objetivos o subjetivos) en los cuales las partes a lo largo de la actuación han aportado documentos en copia simple, sin que en ningún momento se haya llegado a su objeción en virtud de la tacha de falsedad (v.gr. contractuales, reparación directa, nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho), salvo, se itera, que exista una disposición en contrario que haga exigible el requisito de las copias auténticas como por ejemplo el artículo 141 del C.C.A., norma reproducida en el artículo 167 de la ley 1437 de 2011 –nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

En virtud de lo anterior, no debe olvidarse que el artículo 114 del CGP, señala que las providencias que se pretendan ser utilizadas en un proceso como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria, como se verifica a continuación:

“ARTÍCULO 114. COPIAS DE ACTUACIONES JUDICIALES. Salvo que exista reserva, del expediente se podrá solicitar y obtener la expedición y entrega de copias, con observancia de las reglas siguientes:

(...)

2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria”. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Finalmente el artículo 215 del CPACA, es claro al regular:

9.

“ARTÍCULO 215. VALOR PROBATORIO DE LAS COPIAS.

<Inciso derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 de 2012>

La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Las normas transcritas, en especial el artículo 215 del CPACA, despejan todas las dudas sobre el título ejecutivo, el cual, deberá cumplir con los requisitos consagrados en la Ley, **dejando expresamente regulado que los mismos no pueden presentarse en copia simple**, porque de ser así carecería de validez y valor probatorio, como se dejó sentado en la transcripción normativa.

Confirma lo anterior, el artículo 246 del CGP cuando dice: *“las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”* y como en el caso de los procesos ejecutivos existe norma expresa **que prohíbe su presentación en copia simple**, debe entonces presentarse la misma en original con la constancia de ser primera copia, de prestar mérito ejecutivo, y además, que se encuentra debidamente ejecutoriada. (negrilla fuera de texto).

Se concluye que en virtud de lo consagrado en el artículo 430 del C.G.P., solo se profiere mandamiento de pago, si la demanda, además de cumplir con los requisitos de Ley, **está acompañada de la sentencia que constituye el título ejecutivo**, con sus respectivas formalidades – ser primera copia – prestar mérito ejecutivo - contener constancia de ejecutoria; presupuesto que no fue cumplido en el asunto bajo estudio, teniendo en cuenta que **la parte actora no aportó al expediente ni siquiera una copia de la sentencia que pretende ejecutar**, por lo que el Despacho se abstendrá de librar mandamiento ejecutivo de pago.

Adicional a lo anterior, no existe dentro de este proceso ejecutivo poder que faculte al Dr. ALEXANDER SANCHEZ CUBIDES, identificado con la C.C. 79.905.684 de Bogotá y T.P. 129.659 del C.S.J., para actuar como apoderado judicial de la parte actora, careciendo en lo absoluto del derecho de postulación; por lo que al no existir poder que lo faculte para los efectos antes reseñados, no

se reconocerá personería jurídica al abogado citado para representar los intereses de la señora DIANA MARIA GOMEZ ORTIZ.

En estos términos, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

III. RESUELVE:

PRIMERO. NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO, conforme a lo manifestado a lo largo de esta providencia.

SEGUNDO: En firme este proveído archívense las presentes actuaciones dejando las constancias correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA

JUEZ

CATC

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO					
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.					
SECCION SEGUNDA					
EL AUTO ANTERIOR	SE NOTIFICA A LAS PARTES EN ESTADO ELECTRONICO No.	8, A			
TRAVES DE LA PAGINA	WEB	WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO		HOY	
A LAS 8:00 A.M.					
10 MAR. 2019					
SECRETARIO					